

DOCUMENTO DE PROYECTO**Guatemala**

Título del Proyecto: Transformación digital para un mejor acceso a la Justicia de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad en la Corte de Constitucionalidad de Guatemala

Número del Proyecto: 00130652

Asociado en la Implementación: Corte de Constitucionalidad

Duración del proyecto: 12 meses

Ubicación (área geográfica): Ciudad de Guatemala

Breve Descripción

Describe brevemente el desafío general de desarrollo y los resultados esperados del proyecto.

Desarrollo e implementación de capacidades en la Corte de Constitucionalidad para el fortalecimiento de servicios de justicia a través de la incorporación de tecnologías digitales en los procesos de justicia constitucional con lo cual se promoverá la implementación de una estrategia holística e inclusiva en materia de transformación digital que permita el funcionamiento del sistema judicial y la igualdad de acceso a la justicia para todos y todas.

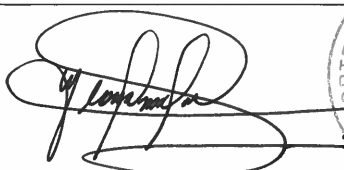



Efectos MANUD a los que contribuye el proyecto:

-Las instituciones del sector justicia incrementan la eficiencia y efectividad en el esclarecimiento de casos, en los niveles de inclusión y equidad.

Producto(s) Indicativo(s) con indicador de género²:
GEN2

	Monto en USD \$		Monto en GTQ ¹
Total de recursos requeridos:	USD\$ 52,580.00		Q. 409,049.79
Total de recursos asignados:	PNUD²:	USD \$ 52,580.00	Q. 409,049.79
No financiado:	0		0

Acordado por (firmas)³:

Corte de Constitucionalidad	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD
Sra. Gloria Patricia Porras Escobar Cargo: Magistrada Presidente de la Corte de Constitucionalidad	Sra. Ana María Díaz Cargo: Representante Residente
 	 
Firma y sello	Firma y sello
Fecha: 25 ENE. 2021	Fecha: 20 ENE 2021

¹ Tipo de cambio vigente en el país al mes de noviembre 2020 para PNUD = 7.77957.

² Global Programme on Strengthening the Rule of Law and Human Rights for Sustaining Peace and Fostering Development (Project 100685)

³ Nota: Ajuste los casilleros de firma según corresponda

² El Indicador de género mide cuánto invierte el proyecto en la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. Favor de seleccionar un producto: GEN3 (Igualdad de género como un objetivo de principio); GEN2 (Igualdad de género como un objetivo significativo); GEN1 (Contribución limitada a la igualdad de género); GEN0 (Ninguna contribución a la igualdad de género)

I. DESAFÍO DE DESARROLLO

El primer caso de COVID-19 en Guatemala fue notificado el 13 de marzo de 2020. Durante el transcurso del mes de marzo, el Gobierno de Guatemala estableció medidas para frenar la propagación de la COVID-19⁴ incluyendo restricciones a la movilidad de las personas, suspensión de labores y actividades en los sectores público y privado con algunas excepciones, restricciones de viajes y traslados entre departamentos, cierre de fronteras, prohibición de eventos públicos y reuniones de personas, entre otros, lo cual ha implicado la paralización de gran parte de las actividades del sector público. Algunas de estas medidas se han mantenido hasta la fecha.

Los efectos de la pandemia de COVID-19 afectarán gravemente a las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad⁵. Según datos de la Corte Suprema de Justicia (2020), al mes de mayo 2020 un total de 31,659 audiencias han sido suspendidas desde el comienzo de la pandemia a mediados de marzo 2020. La acumulación de casos indudablemente afectará el desempeño de todas las instituciones del sector justicia y su capacidad de cobertura en territorios. La pandemia ha dado lugar a desafíos de justicia que enfrentan las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Los problemas van desde cómo acceder a servicios de justicia de manera presencial hasta el retraso en procesos judiciales. Esto aumentará aún más la mora judicial en el sistema de justicia del país.

Según el Centro de Investigaciones Económicas (CIEN), en el año 2019, la eficiencia global del sistema de justicia fue de 32.3%⁶ lo que significa que, de cada 100 casos ingresados en el sistema, se les da salida a 32. De acuerdo con mediciones realizadas por el Flujograma de la Justicia Criminal en Guatemala (2019), el sistema de justicia incrementó su eficiencia en 0.6% cifra que se podrá ver afectada por los retos que ha significado la pandemia por el COVID-19 en el sistema de justicia.

El reporte “Índice de Estado de Derecho 2017-2018” realizado por World Justice Project (2018) hace referencia que “el acceso a la justicia se refiere a aspectos tales como si las personas tienen conocimiento sobre los mecanismos disponibles, si pueden acceder a estos mecanismos y si pueden acceder al sistema de tribunales sin incurrir en pagos injustificados, procedimientos difíciles, o enfrentar obstáculos físicos o lingüísticos”⁷. El referido reporte asigna a Guatemala un puntaje general de 0.44, dicha evaluación mide factores como límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal, los puntajes para el país en los referidos factores en su mayoría fueron bajos⁸.

La justicia constitucional ha existido desde hace más de un siglo en Guatemala, pero la Corte de Constitucionalidad como institución especializada y rectora de la justicia constitucional, fue creada en 1985 por la actual Constitución Política de la República de Guatemala. La importancia de su mandato radica en que tiene la función esencial de resguardar el orden constitucional de la República.

La Corte de Constitucionalidad como institución especializada y rectora de la justicia constitucional, ha jugado el rol de árbitro institucional para dirimir los grandes conflictos del país, este papel es especialmente importante en una sociedad que, si bien hace esfuerzos importantes para construir su

⁴ Estado de calamidad (6 de marzo), suspensión de actividades laborales (17 de marzo), toque de queda (22 de marzo)

⁵ Se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico (IIDH, 2014). Para fines de esta propuesta, se considera entre la población en condiciones de vulnerabilidad a mujeres y pueblos indígenas.

⁶ La eficiencia se mide a través de variables como el total de casos ingresados en el MP y el total de salidas de casos por año en el MP y OJ.

⁷ World Justice Project. “Índice de Estado de Derecho 2017-2018”, página 17. <https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/2017-18%20ROLI%20Spanish%20Edition.pdf>

⁸ El Índice de Estado de Derecho 2017-2018 presenta una evaluación para 113 países, y asigna puntajes y rankings para ocho factores, siendo estos: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.

DOCUMENTO DE PROYECTO**Guatemala**

Estado de Derecho, vive constantemente en medio de coyunturas complejas que no le han permitido fortalecer su institucionalidad.

El apoyo técnico del PNUD a la Corte se dio por primera vez al final de la sexta magistratura en 2015. Este apoyo básicamente se concentró en un plan de trabajo de un año que incluía tres grandes líneas, iniciar a combatir el abuso del amparo a través del “expediente electrónico” y una unidad de atención temprana para depurar los casos que no tenían sustento legal, iniciar a mejorar el acceso a la justicia constitucional de los grupos vulnerables y fortalecer la institucionalidad relacionado a los anteriores ejes. Con ese apoyo se logró informatizar todo el expediente y empezar a superar la lógica de papeles, e instalar la unidad para depurar los casos que, aunque tuvo algunos inconvenientes en su funcionamiento inicial, debería ser una de las grandes apuestas para ir superando la sobrecarga de trabajo y el abuso del amparo. Asimismo, se promovió el acercamiento de la Corte a grupos vulnerables, a través de foros públicos sobre temas de pueblos indígenas e infancia y la traducción de la Constitución en el idioma Ixil.

La Corte aprobó por unanimidad el Plan Estratégico Quinquenal PLAECC 2017 -2022, el referido plan fue desarrollado con el acompañamiento técnico del PNUD e incluye las prioridades para cinco años con independencia de la presidencia de turno y alinea los procesos que venía gestando la institución, como los mencionados en este apartado. En el año 2020 el PNUD brindó asistencia técnica a la Presidencia anterior para realizar el Plan Anual de Trabajo (PAT) y en la elaboración del Informe de Avance del PLAECC, el cual fue un ejercicio de monitoreo que informó a Presidencia y a la mesa gerencial. Por otro lado, se desarrolló una aplicación móvil dentro del sistema informático de expedientes de la CC que permite a los notificadores registrar en tiempo real el resultado de las notificaciones realizadas.

De conformidad con los principios con que se basa la organización democrática del Estado de Guatemala y en observancia a lo regulado por la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, existen medios jurídicos que garantizan el irrestricto respeto a los derechos inherentes del ser humano, a la libertad de su ejercicio y a las normas fundamentales que rigen el Estado de Derecho. Dentro de estas garantías constitucionales y de defensa del orden constitucional se encuentran el amparo, la exhibición personal y la inconstitucionalidad de leyes en caso general. La función jurisdiccional le corresponde a la Corte de Constitucionalidad quien la delega en la jurisdicción ordinaria para que de manera extraordinaria y constituidos como órganos y juzgados constitucionales ejerzan la justicia constitucional.

Por ello, es de suma importancia para la Corte de Constitucionalidad generar mecanismos que fortalezcan la interconexión entre la Corte de Constitucionalidad, el Organismo Judicial y otras instituciones como el MP, IDDP y PGN que permita la gestión integrada de los expedientes de manera que se garantice el acceso a la justicia pronta y cumplida y la defensa del Estado de Derecho.

II. ESTRATEGIA.

El presente proyecto tiene por objetivo mejorar los servicios de justicia con la incorporación de Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) en las actuaciones del ramo de justicia constitucional en el contexto es necesario aumentar la efectividad de las instituciones afectadas por la pandemia por COVID-19. Dicha iniciativa se enfoca en atender necesidades de fortalecimiento institucional, tanto en el desarrollo de capacidades como en la construcción de herramientas y metodologías dentro de las cuales se incluyen el enfoque de derechos humanos, enfoque de género, pertinencia cultural y la protección de datos sensibles.

Se promoverá la implementación de una estrategia holística e inclusiva en materia de transformación digital que permita el funcionamiento del sistema judicial y la igualdad de acceso a la justicia para todos y todas, en especial para poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Este fortalecimiento se brindará a la

Corte de Constitucionalidad. El proyecto contribuirá al logro del ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas y la meta 16.3: Promover el Estado de Derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos. El proyecto responderá a las recomendaciones del Plan de Respuesta Socio Económica al COVID-19 del SNU en Guatemala⁹.

A través del presente proyecto se pretende contribuir al desarrollo e implementación de capacidades y herramientas institucionales en la Corte de Constitucionalidad en el marco del desafío de “Promover mecanismos virtuales para el acceso a justicia de grupos en situación de mayor vulnerabilidad”. En este sentido, la transversalización de la perspectiva de género y el enfoque desde la pertinencia cultural está implícito en cada una de las fases de la presente iniciativa, para promover la prestación de servicios más efectivos, incluyentes e integrales.

III. ALINEACIÓN CON POLÍTICAS PÚBLICAS

El Plan Estratégico del PNUD para 2018-2021, parte del enfoque integrador plasmado en la Agenda 2030, y tiene por objeto apoyar eficazmente el desarrollo sostenible en tres grandes entornos, siendo estos: “a) *ayudar a los países a lograr el desarrollo sostenible mediante la erradicación de la pobreza y la eliminación de las desigualdades en todas sus formas y dimensiones*; b) *la aceleración de las transformaciones estructurales para el desarrollo sostenible*; y c) *La creación de resiliencia ante perturbaciones y crisis*”¹⁰. La presente iniciativa se relaciona con el entorno de desarrollo “Aceleración de las transformaciones estructurales para el desarrollo sostenible”.

Asimismo, el proyecto se inserta de manera coherente en la planificación del Sistema de Naciones Unidas contribuyendo de manera directa a lo establecido en el Marco Estratégico de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible 2020 – 2025 contribuyendo al efecto 2.1 “Las instituciones del Estado fortalecidas incrementan la seguridad ciudadana, el acceso a la justicia y la transformación de conflictos, buscando mayor coordinación a nivel nacional y local”.

El presente proyecto se encuentra alineado al marco normativo y políticas públicas establecidas por el Estado de Guatemala por lo que contribuirá a los siguientes ejes de trabajo:

(a) Plan Nacional de Desarrollo: K’atun nuestra Guatemala 2032

Eje número 5, denominado “*El Estado como garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo. Generar capacidades políticas, legales, técnicas, administrativas y financieras de la institucionalidad pública, para poner al Estado en condiciones de conducir un proceso de desarrollo sostenible con un enfoque de derechos en el marco de la gobernabilidad democrática*”.

Prioridad: fortalecimiento de las capacidades del Estado para responder a los desafíos del desarrollo.

Meta 7. En 2032 los mecanismos de gestión pública se encuentran fortalecidos y se desarrollan en el marco de la eficiencia y la eficacia.

Resultado 7.1 En el año 2032 se ha consolidado los mecanismos de gestión pública pertinentes para asegurar una alta eficiencia, eficacia y calidad del gasto público.

Resultado 7.3. En 2032, El Estado utiliza herramientas y mecanismos del gobierno electrónico para transparentar la gestión pública, prestar oportuna y eficientemente los servicios y procurar el acercamiento de la gestión pública al ciudadano.

⁹ Recomendación UNCT No. 5.10: Promover mecanismos virtuales para el acceso a justicia de grupos en situación de mayor vulnerabilidad; Recomendación UNCT No. 5.11: Promover la modernización de procesos (implementación de gobierno abierto y digital) en los ámbitos de seguridad y justicia.

¹⁰ Plan Estratégico del PNUD para 2018-2021, página 11 <https://undocs.org/es/DP/2017/38>

DOCUMENTO DE PROYECTO

Guatemala

Prioridad: seguridad y justicia con equidad, pertinencia de los pueblos maya, xinka, garífuna, social, sexual y etaria.

Meta 2. En 2032 la impunidad ha disminuido sustancialmente, de manera que el país se sitúa en posiciones intermedias de los estándares mundiales.

Resultado 2.1. En 2020 los procesos jurídicos se desarrollan de manera eficiente, atendiendo a la temporalidad del debido proceso. Ello permite que al país paulatinamente se le ubique en una posición favorable dentro de los procesos de medición certificados.

En virtud de lo anterior, resulta relevante para el sistema democrático que la administración de justicia sea eficiente, independiente y autónoma. Estas características garantizan la legalidad y la protección de los derechos fundamentales de las personas. Una condición básica para garantizar el Estado Democrático de Derecho es el cumplimiento de las funciones de la Corte de Constitucionalidad, como un tribunal permanente de jurisdicción privativa con la función esencial de defender el orden constitucional; actúa como tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado y ejerce funciones específicas que asigna la Constitución y con la presente iniciativa se apoyará la incorporación de soluciones innovadoras que impliquen el uso de tecnología para mejorar los servicios de justicia constitucional de conformidad con lo establecido en el Artículo 268 de la Constitución Política de la República de Guatemala.

El proyecto contribuirá a la prioridad nacional de desarrollo “Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles”.

(b) Objetivos de Desarrollo Sostenible

El objetivo 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la Organización de las Naciones Unidas, se centra en la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, la provisión de acceso a la justicia para todos y la construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los niveles. Actualmente la pandemia está afectando significativamente los avances en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y actualmente los Estados están luchando para mantener la línea y salvaguardar el progreso que se ha alcanzado. Este proyecto estimulará la innovación y brindará nuevas oportunidades para brindar servicios de justicia más efectivos en la Corte de Constitucionalidad.

De esa cuenta, el proyecto contribuirá al logro del ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas y a la meta 16.3: Promover el Estado de Derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos y la meta 16.6: Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles. El proyecto responderá a las recomendaciones del Plan de Respuesta Socio Económica al COVID-19 del SNU en Guatemala, en específico a las recomendaciones 5.10 “Promover mecanismos virtuales para el acceso a justicia de grupos en situación de mayor vulnerabilidad; y 5.11: “Promover la modernización de procesos (implementación de gobierno abierto y digital) en los ámbitos de seguridad y justicia”.

(c) Políticas institucionales de la Corte de Constitucionalidad

La propuesta se encuentra alineada a las políticas institucionales en materia de modernización y transformación digital, en la Corte de Constitucionalidad, el proyecto se encuentra alineado con el Plan Estratégico Quinquenal en el Eje número uno “Acceso a la Justicia Constitucional con Igualdad y Equidad”; Eje Número 2 “Modernización del Sistema de Gestión de casos de la Corte de Constitucionalidad” y Eje número tres “Desarrollo Integral Tecnologías Informáticas”.

Por otro lado, este proyecto se encuentra alineado con los principios en que se basa la organización democrática del Estado de Guatemala y en observancia a lo regulado por la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, existen medios jurídicos que garantizan el irrestricto respeto a los derechos inherentes del ser humano, a la libertad de su ejercicio ya las normas fundamentales que rigen el Estado de Derecho.

IV. RESULTADO:

Por medio del presente proyecto se pretende contribuir al desarrollo e implementación de un sistema informático integrado de gestión de expedientes de las garantías constitucionales, mediante el cual los juzgados y tribunales del país, agilicen el acceso a la justicia constitucional y que puedan contar con un sistema electrónico de procesos constitucionales.

Resultado: Implementación de soluciones digitales para la efectiva coordinación interinstitucional de las instituciones de justicia.

El producto que se desarrollará será el siguiente:

Producto 1: Implementado un módulo dentro del sistema informático de expedientes de la Corte de Constitucionalidad (SIECC) integrado para el diligenciamiento procesal de las garantías constitucionales del sector justicia del país.

V. ALCANCES:

Producto 1: En el marco del proyecto se desarrollará e implementará un módulo dentro del sistema informático de expedientes electrónicos (SIECC), este módulo del sistema informático estará integrado a la gestión de expedientes relacionados con garantías constitucionales, con el objeto de que los juzgados y tribunales del país, que se encuentren en ejercicio de la función de brindar justicia constitucional puedan acceder al sistema electrónico de integración de los procesos constitucionales que facilite el acceso a la justicia pronta y cumplida, la defensa del Estado de Derecho y las libertades individuales de las personas.

Para lograr lo anterior, se desarrollará un módulo informático de gestión procesal en el Sistema de la Corte de Constitucionalidad, al cual se integrará de manera electrónica la gestión procesal que ejerce la jurisdicción ordinaria en función de la justicia constitucional, a través de los juzgados y tribunales ordinarios del país, lo cual generará uniformidad en el manejo de procesos facilitando la diligencia y eficiencia en la gestión de procesos entre la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia.

Asimismo, se contribuirá al desarrollo de herramientas normativas que permitan generar las condiciones para una justicia pronta y cumplida. Se desarrollará la Política de Acceso a la Justicia Constitucional para poblaciones en condiciones de vulnerabilidad.

DOCUMENTO DE PROYECTO**Guatemala**

Recursos requeridos para lograr el resultado esperado

Resultado/Producto	Nombre actividad	Presupuesto por actividad Q.	Cuenta	Categoría presupuestaria UN
Resultado: Implementadas soluciones digitales para la efectiva coordinación interinstitucional de las instituciones de justicia.				
Producto 1	Implementado un módulo dentro del sistema informático de expedientes de la Corte de Constitucionalidad (SIECC) integrado para el diligenciamiento procesal de las garantías constitucionales del sector justicia del país.	132,252.69	71300	Contratación de un consultor para que desarrolle la formulación teórica, planificación y cronograma del Módulo dentro del Sistema Informático de Expedientes (SIECC) para el diligenciamiento procesal de las garantías constitucionales de instituciones del sector justicia del país.
		46,677.42	72200	Equipo de cómputo
		93,354.84	71300	Contratación de consultor para desarrollo de la Política de Acceso a la Justicia Constitucional para poblaciones en condiciones de vulnerabilidad
		15,559.14	75700	Eventos de capacitación
		18,414.24	72500	Suministros
	Subtotal 1	306,258.33		
Gestión del Proyecto				
Servicios contractuales		54,456.99	71400	Asistente administrativo-financiero,

			Encargado/a de Monitoreo y Evaluación del Proyecto
Costos directos de implementación	18,034.37	74500	
Costos Indirectos de Implementación 8%	30,300.10	75100	
Sub-total de Gestión del Proyecto	102,791.46		
Total Proyecto	409,049.79		

DOCUMENTO DE PROYECTO**Guatemala****Resumen del presupuesto por categorías:**

Categoría	Monto PNUD Q.
Consultores locales	225,607.53
Equipo y mobiliario	46,677.42
Suministros	18,414.24
Talleres	15,559.14
Sub-Total costos proyecto	Q 306,258.33
Servicios contractuales	54,456.99
Costos directos implementación	18,034.37
Costos Indirectos de implementación 8%	30,300.10
Sub-total gestión de proyecto	Q 102,791.46
Total del proyecto Q.	Q 409,049.79
Total del Proyecto en USD\$	\$52,580.00

Riesgos y Supuestos

Riesgos	La probabilidad de ocurrencia (alta, media, baja)	Severidad del impacto de riesgo (alto, medio, bajo)	Estrategia de Mitigación (Persona / Unidad responsable)
Cambios de autoridades o jefaturas de departamentos y/o direcciones de las instituciones asociadas pueden causar una baja del interés en la implementación del proyecto.	Media	Alto	Reuniones técnicas de planificación de actividades y seguimiento con puntos focales asignados por los asociados que estén vinculados con la labor de planificación institucional.
Desmotivación del personal de las instituciones ante el cambio generado por el uso de nuevas tecnologías (TICs).	Medio	Medio	Capacitación permanente a los equipos en el uso de la tecnología incorporada para la mejora en los servicios de justicia. Poner a disposición la tecnología para que la puedan utilizar.
Falta de involucramiento del personal de las instituciones no permiten la institucionalización y puesta en funcionamiento de guías y protocolos.	Bajo	Medio	Reuniones de técnicas planificación de actividades y seguimiento con puntos focales asignados por los asociados que estén vinculados con sustantivamente y/o operativamente con la implementación de las

			actividades.
--	--	--	--------------

VI. SOSTENIBILIDAD Y ESCALAMIENTO

La entidad a cargo de la ejecución del proyecto será el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- una organización internacional con amplia experiencia en asegurar la eficacia de los proyectos de desarrollo. En esa medida, se aplicarán criterios de sustentabilidad en el diseño e implementación del proyecto, tales como la apropiación por parte de actores clave y resultados replicables.

Las aportaciones de la entidad de gobierno participante será su capacidad instalada. De esa cuenta la Corte de Constitucionalidad aportará su experiencia, así como recursos humanos no financiados por el proyecto, equipo y plataformas informáticas con las cuales ya cuentan. La referida entidad gubernamental asumirá la propiedad, liderazgo y continuidad de los productos generados dentro del proyecto institucionalizando los mismos para garantizar su sostenibilidad con fondos propios.

VII. GESTIÓN DEL PROYECTO:

El proyecto será implementado bajo la modalidad de implementación directa, por tanto, se regirá según las disposiciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-. De igual manera, la responsabilidad programática y financiera será del PNUD, quien trasladará información sobre el avance físico y financiero a la Corte de Constitucionalidad para el registro de la ejecución de la cooperación en los sistemas disponibles según la normativa vigente.

El PNUD goza de independencia y experiencia en articular capacidades de asistencia técnica e investigación de procedencia diversa. La ejecución del presente proyecto, incluyendo la adquisición de bienes (compra de equipo de cómputo, software, entre otros) y servicios (servicios profesionales de consultoría, servicios de producción editorial, servicios hoteleros y de alimentación, entre otros), se ajustará a los lineamientos y normas del PNUD para proyectos de implementación directa (DIM) y serán cubiertos con fondos del proyecto de acuerdo con la política de recuperación de costos de PNUD. El proyecto será auditado según las normas y procedimientos del PNUD.

Los documentos, información obtenida y resultados producidos por el proyecto, serán aprobados por las autoridades de ambas instituciones y serán propiedad de la Corte de Constitucionalidad. Asimismo, todas las publicaciones elaboradas llevarán el logo de la Corte de Constitucionalidad y del PNUD apegándose a la normativa de cada institución. De acuerdo con los procedimientos estándares del PNUD, los equipos y bienes adquiridos durante la implementación del Proyecto serán propiedad del PNUD y serán transferidos oficialmente a la Corte de Constitucionalidad, en base a la normativa vigente para el efecto.

Se establecerá un Comité técnico de Alto Nivel para coordinar los distintos esfuerzos que contribuyan a la gestión del proyecto y monitorear el avance conjunto de este.

Marco de Resultados ¹¹ Efecto previsto conforme lo establecido en el Marco Estratégico de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible 2020 – 2025											
-Las instituciones del Estado fortalecidas incrementan la seguridad ciudadana, el acceso a la justicia y la transformación de conflictos, buscando mayor coordinación a nivel nacional y local.											
Indicadores de Efecto según lo establecido en el Marco de Resultados y Recursos del Programa de País [o Global/Regional], incluidos las metas y la línea de base:											
-Tasa Global de Impunidad.											
Producto(s) Aplicable(s) del Plan Estratégico del PNUD:											
Título del Proyecto y Número del Proyecto: Transformación digital para un mejor acceso a la Justicia de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad en la Corte de Constitucionalidad.											
RESULTADO ESPERADO	INDICADORES DE PRODUCTO ¹²	FUENTE DE DATOS	LÍNEA DE BASE		METAS (según frecuencia de recolección de datos)					Beneficiarios	Metodología y riesgos de la recolección de datos
			Valor	Año	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	Año ...		
Producto 1 Implementado un módulo dentro del sistema informático de expedientes de la Corte de	Existencia de un sistema informático integrado para el diligenciamiento procesal de garantías constitucionales.	CC	No existe	2020			Existe			Existe	

¹¹ El PNUD publica su información sobre proyectos (indicadores, líneas de base, metas y resultados) para cumplir con las normas de la Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda (IATI). Es necesario asegurarse de que los indicadores sean S.M.A.R.T. (Específicos, Medibles, Alcanzables, Relevantes y con Plazos Establecidos), cuenten con líneas de base precisas y metas sostenidas por evidencia y datos confiables, y evitar abreviaturas para que los lectores externos comprendan los resultados del proyecto.

¹² Se recomienda que los proyectos utilicen indicadores de producto del Marco Integrado de Recursos y Resultados (IRRF) del Plan Estratégico, según resulte relevante, además de los indicadores de resultados específicos del proyecto. Los indicadores deben desagregarse por género o por otros grupos objetivo, según resulte relevante.

Constitucionalidad (SIECC) integrado para el diligenciamiento procesal de las garantías constitucionales del sector justicia del país.	Número de funcionarios/as capacitados en el uso del sistema informático para el diligenciamiento procesal de garantías constitucionales.	CC	0	2020					20			
	Número de funcionarios que participan en el proceso de formulación de la Política de Acceso a la Justicia Constitucional	CC	0	2020	10				10			

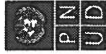
MONITOREO Y EVALUACIÓN

De conformidad con las políticas y los procedimientos de programación del PNUD, el proyecto se monitoreará a través de los siguientes planes de monitoreo y evaluación.

Plan de Monitoreo

Actividad de Monitoreo	Objetivo	Frecuencia	Medidas a Seguir	Asociados (si fuese conjunto)	Costo (si lo hubiese)
Seguimiento del progreso en el logro de los resultados	Reunir y analizar datos sobre el progreso realizado en comparación con los indicadores de resultados que aparecen en el Marco de Resultados y Recursos (RRF por sus siglas en inglés) incluyendo datos sobre dimensiones de género, multiculturalidad e inclusión para el mejoramiento de las capacidades institucionales a fin de valorar el avance del proyecto en relación con el logro de los productos acordados	Trimestralmente, o según la frecuencia que se requiera para cada indicador.	La gerencia del proyecto analizará cualquier demora que afecte el avance esperado del proyecto.	OJ	El plan de M&E será coordinado por el PNUD.
Monitoreo y Gestión del Riesgo	Identificar riesgos específicos que pueden comprometer el logro de los resultados previstos. Identificar y monitorear medidas de gestión del riesgo mediante un registro de riesgos. Ello incluye medidas de monitoreo y planes que se pueden haber exigido según los Estándares Sociales y Ambientales y Política de Género del PNUD. Las auditorías se realizarán conforme a la política de auditoría del PNUD para gestionar el riesgo financiero.	Trimestral	La gerencia del proyecto identificará los riesgos y tomará medidas para controlarlos. Se mantendrá un registro activo para el seguimiento de los riesgos identificados y las medidas tomadas.	OJ	
Aprendizaje	Se captarán en forma periódica los conocimientos, las buenas prácticas y las lecciones aprendidas de otros proyectos y asociados en la implementación y se integrarán al presente proyecto.	Trimestral	El equipo del proyecto capta las lecciones relevantes que se utilizarán para tomar decisiones gerenciales debidamente informadas.	OJ	

Aseguramiento de Calidad Anual del Proyecto	Se valorará la calidad del proyecto conforme a los estándares de calidad del PNUD a fin de identificar sus fortalezas y debilidades e informar a la gerencia para apoyar la toma de decisiones que facilite las mejoras relevantes.	Anual	La gerencia del proyecto revisará las fortalezas y debilidades que se utilizarán para la toma de decisiones informadas a fin de mejorar el desempeño del proyecto	OJ	
Revisar y Efectuar Correcciones en el curso de acción	Revisión interna de datos y evidencia a partir de todas las acciones de monitoreo para asegurar la toma de decisiones informadas.	Trimestral	La Junta de Proyecto debatirá los datos de desempeño, riesgos, lecciones y calidad que se utilizarán para corregir el curso de acción.	OJ	
Informe del Proyecto	Se presentará un Informe del Proyecto al Comité Técnico de Alto Nivel y a los actores clave, incluyendo datos sobre el progreso realizado que reflejen los resultados logrados de conformidad con las metas anuales definidas de antemano en cuanto a productos, un resumen anual sobre la calificación de la calidad del proyecto, un registro de riesgos actualizado, con medidas de mitigación, y todo informe de evaluación o revisión preparado durante el período.	Semi-Anual y Anual		OJ	
Revisión del Proyecto (Junta Directiva del Proyecto)	El mecanismo de gobernanza del proyecto (es decir, el Comité Técnico de Alto Nivel) efectuará revisiones periódicas del proyecto para evaluar su desempeño y revisar el Plan de Trabajo, a fin de asegurar una elaboración del presupuesto realista durante la vida del proyecto. En el transcurso del último trimestre del proyecto, la Junta Directiva realizará una revisión final del proyecto para captar las lecciones aprendidas y debatir aquellas oportunidades para escalar y socializar los resultados del proyecto y las lecciones aprendidas con los actores	Anual	La Junta de Proyecto debatirá toda inquietud referente a la calidad o a un progreso más lento de lo esperado y acordará medidas de gestión para abordar las cuestiones identificadas.	OJ	



DOCUMENTO DE PROYECTO
Guatemala

	relevantes.			
--	-------------	--	--	--

CRONOGRAMA¹³¹⁴

Es necesario identificar, estimar y costear en el presupuesto del proyecto bajo el/los producto/s relevantes, todo lo que se prevé a modo de costos programáticos y operativos en apoyo del proyecto. Ello incluye actividades en apoyo directo del Proyecto como, por ejemplo, comunicación, recursos humanos, adquisiciones y contrataciones, finanzas, auditoría, asesoramiento en políticas, aseguramiento de la calidad, informes, gestión, etc. En el documento de proyecto deben incluirse con total transparencia todos los servicios directamente relacionados con el mismo.

RESULTADO ESPERADO	PRODUCTOS	Trimestre				RESPONSABLE	PRESUPUESTO PREVISTO		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Descripción del Presupuesto	Monto Quetzales
Implementadas soluciones digitales para la efectiva coordinación interinstitucional de las instituciones de justicia.	Implementado un módulo dentro del sistema informático de expedientes de la Corte de Constitucionalidad (SIECC) integrado para el diligenciamiento procesal de las garantías constitucionales del sector justicia del país.		X	X	X	PNUD	28623	71300	132,252.69
			X	X	X		28623	72200	46,677.42
		X	X				28623	71300	93,354.84
							28623	75700	15,559.14
			X	X	X		28623	72500	18,414.24

¹³ En la decisión DP/2010/32 de la Junta Ejecutiva del PNUD se definen los costos y clasificaciones para la efectividad de los costos del programa y el desarrollo a ser cargados al proyecto.

¹⁴ Los cambios al presupuesto del proyecto que afectan el alcance (productos), fechas de finalización, o costos totales estimados del proyecto exigen una revisión formal del presupuesto que debe ser firmada por la Junta Directiva. En otros casos, el/la gerente de programa del PNUD podrá ser el único en firmar la revisión siempre que los otros firmantes no tengan objeciones. Por ejemplo, podrá aplicarse este procedimiento cuando el objetivo de la revisión sea simplemente reprogramar actividades para otros años.

				Subtotal 1					306,258.33
				Servicios contractuales			71400		54,456.99
				Costos directos de implementación			74500		18,034.37
				Costos Indirectos de Implementación 8%					30,300.10
				Sub-total gestión de proyecto					102,791.46
				Total Proyecto Quetzales					409,049.79
				Total Proyecto Dólares					52,580.00

XV. ARREGLOS DE GESTIÓN Y GOBERNANZA

Los arreglos de gestión relativos a la dirección estratégica y a la supervisión del proyecto serán acorde a lo establecido por los mecanismos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-.

Se establecerá un comité técnico de alto nivel presidido por la Representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el/la Magistrado Presidente de la Corte de Constitucionalidad. Este comité tiene como propósito garantizar el cumplimiento de los resultados del proyecto, asimismo, ser un mecanismo de interlocución. El comité sostendrá reuniones periódicas programadas. El PNUD designará a un/a Oficial de Programa, que actuará como garante.

Garante de Proyecto:

El Garante de Proyecto tendrá la responsabilidad de acompañar y monitorear el avance del Proyecto. Deberá asegurar la adecuada gestión. El Garante del Proyecto es independiente del gestor del proyecto y el rol será desempeñado por un Oficial de Programa del PNUD.

Unidad Técnica de Proyecto (UTP):

La UTP será el ente responsable de la organización y gestión del proyecto. Estará compuesta por un Encargado/a de Monitoreo, personal administrativo y de adquisiciones, así como del equipo de asistencias técnicas especializadas que sean contratadas con cargo al proyecto.



XVI. CONTEXTO LEGAL

Este Documento de Proyecto constituirá el instrumento al que se hace referencia en el Artículo I del Acuerdo Básico de Asistencia firmado el 20 de julio de 1998 entre el Gobierno de Guatemala y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Toda referencia que se haga en el Acuerdo SBAA a la “Agencia de Ejecución” se interpretará como una referencia al “Asociado en la Implementación”.

El Asociado en la Implementación deberá asegurar la mejor relación calidad-precio, imparcialidad, integridad, transparencia y competencia internacional efectiva en la gestión financiera de la implementación del proyecto. Este proyecto será implementado por Programa de las Naciones Unidas que será el encargado de implementar el proyecto de conformidad con sus reglamentaciones, reglas, prácticas y procedimientos financieros siempre y cuando no viole principio alguno de las Reglas y Regulaciones Financieras del PNUD. En todos los demás casos, se seguirán las Reglas y Regulaciones Financieras y los procedimientos de gestión del PNUD.

XVII. GESTIÓN DE RIESGOS

1. El PNUD como Asociado en la Implementación cumplirá con las políticas, procedimientos y prácticas del Sistema de Gestión de Seguridad de las Naciones Unidas (UNSMS por sus siglas en inglés).
2. El PNUD como Asociado en la Implementación realizará todos los esfuerzos que resulten razonables a fin de asegurar que ninguno de[los fondos del proyecto]¹⁵ [fondos del PNUD recibidos conforme al Documento de Proyecto]¹⁶ se utilicen para brindar asistencia a personas o entidades vinculadas con el terrorismo, y que los receptores de los fondos provistos por el PNUD en el marco del presente proyecto no aparezcan en la lista del Comité del Consejo de Seguridad, creado por Resolución 1267 del año 1999. Este listado puede consultarse en http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml. Esta disposición debe incluirse en todos los subcontratos y sub-acuerdos firmados en el marco del presente Documento de Proyecto.
3. Se reforzará la sostenibilidad social y ambiental a través de la aplicación de los Estándares Sociales y Ambientales del PNUD (<http://www.PNUD.org/ses>), y del Mecanismo de Rendición de Cuentas (<http://www.PNUD.org/secu-srm>).
4. PNUD como Asociado en la Implementación: (a) realizará las actividades relacionadas con el proyecto y programa en conformidad con los Estándares y Ambientales del PNUD; (b) implementará el plan de gestión o mitigación para que el proyecto o programa cumpla con dichos estándares; y (c) participará de un modo constructivo y oportuno para abordar cualquier inquietud o queja planteada a través del Mecanismo de Rendición de Cuentas. El PNUD se asegurará de que los organismos y otras partes interesadas estén debidamente informados de la existencia del Mecanismo de Rendición de Cuentas y puedan acceder al mismo.
5. Todos los firmantes del Documento de Proyecto colaborarán de buena fe en los ejercicios destinados a evaluar los compromisos del programa o proyecto, o el cumplimiento con los Estándares Sociales y Ambientales del PNUD. Ello incluye el acceso a sitios del proyecto, personal relevante, información y documentación.
6. El PNUD como Asociado en la Implementación velará que las obligaciones siguientes sean vinculantes para cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario:

¹⁵ Texto a ser utilizado cuando el PNUD es el Asociado en la Implementación.

¹⁶ Texto a ser utilizado cuando el Asociado en la Implementación sea Naciones Unidas, un Fondo/Programa de las Naciones Unidas o una agencia especializada.

DOCUMENTO DE PROYECTO**Guatemala**

- a) De conformidad con el Artículo III de la SBAA [*o las Disposiciones Suplementarias del Documento de Proyecto*], cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario tendrá la responsabilidad de la seguridad y protección de cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario, de su personal, de su propiedad, y de los bienes del PNUD que se encuentren en su custodia. Con este fin, cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario:
 - i) Instrumentará un plan de seguridad adecuado y sostendrá dicho plan, teniendo en cuenta la situación de seguridad del país en el que se desarrolla el proyecto;
 - ii) Asumirá todos los riesgos y responsabilidades relacionados con la seguridad de la parte responsable, del subcontratista y del sub-beneficiario y la plena implementación del plan de seguridad.
- b) El PNUD se reserva el derecho de verificar si dicho plan está en vigor y de sugerir modificaciones al plan cuando sea necesario. El incumplimiento de mantener e implementar un plan de seguridad apropiado como se requiere en este documento se considerará un incumplimiento de las obligaciones de la parte responsable, subcontratista y sub-receptor bajo este Documento de Proyecto.
- c) Cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario adoptará las medidas apropiadas para evitar el uso indebido de fondos, fraude o corrupción por parte de sus funcionarios, consultores, subcontratistas y sub-receptores en la ejecución del proyecto o programa o utilizando los fondos del PNUD. Garantizará que sus políticas de gestión financiera, lucha contra la corrupción y lucha contra el fraude se apliquen y se apliquen a todos los fondos recibidos de o por conducto del PNUD.
- d) Los requisitos de los siguientes documentos, vigentes en el momento de la firma del Documento de Proyecto, se aplican a cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario: (a) Política del PNUD sobre Fraude y otras Prácticas Corruptas y (b) Directrices de la Oficina de Auditoría e Investigaciones del PNUD. Cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario acepta los requisitos de los documentos anteriores, los cuales son parte integral de este Documento de Proyecto y están disponibles en línea en www.undp.org.
- e) En caso de que se requiera una investigación, el PNUD realizará las investigaciones relacionadas con cualquier aspecto de los proyectos y programas del PNUD. Cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario proporcionará su plena cooperación, incluida la puesta a disposición del personal, la documentación pertinente y el acceso a sus locales (y de sus consultores, partes responsables, subcontratistas y sub-adjudicatarios), en las condiciones razonables que sean necesarias para los fines de una investigación. En caso de que haya una limitación en el cumplimiento de esta obligación, el PNUD consultará con la parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario para encontrar una solución.
- f) Cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario mantendrá informado al PNUD, como Asociado en la Implementación, de manera inmediata de cualquier incidencia de uso inapropiado de fondos, o alegación creíble de fraude o corrupción con la debida confidencialidad.

Cuando la parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario sepa que un proyecto o actividad del PNUD, en su totalidad o en parte, es objeto de investigación por presunto fraude o corrupción, cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario informará al Representante Residente / Jefe de Oficina del PNUD, quien informará prontamente a la Oficina de Auditoría e Investigaciones del PNUD (OAI). Cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario proporcionará actualizaciones periódicas al jefe del PNUD en el país y la OAI del estado y las acciones relacionadas con dicha investigación.

- g) El PNUD tendrá derecho a un reembolso por parte de la parte responsable, subcontratista o sub-beneficiario de los fondos que hayan sido utilizados de manera inapropiada, incluyendo fraude o corrupción, o pagados de otra manera que no sean los términos y condiciones del Documento del Proyecto. Dicho monto puede ser deducido por el PNUD de cualquier pago debido al de la parte responsable, subcontratista o sub-beneficiario bajo este o cualquier otro acuerdo. La recuperación de esa cantidad por el PNUD no disminuirá o limitará las obligaciones de la parte responsable, subcontratista o sub-beneficiario bajo este Documento de Proyecto.

Cuando dichos fondos no hayan sido reembolsados al PNUD, la parte responsable, subcontratista o sub-beneficiario está conforme con que los donantes del PNUD (incluido el Gobierno), cuya financiación sea la fuente, en su totalidad o en parte, de los fondos destinados a las actividades previstas en el presente Documento de Proyecto, podrán solicitar recurso a la parte responsable, subcontratista o sub-beneficiario para la recuperación de cualesquiera fondos determinados por el PNUD que hayan sido utilizados de manera inapropiada, incluso mediante fraude o corrupción, o que hayan sido pagados de otra manera que no sea conforme a los términos y condiciones del Documento del Proyecto.

Nota: El término "Documento del Proyecto", tal como se utiliza en esta cláusula, se considerará que incluye cualquier acuerdo subsidiario pertinente posterior al Documento del Proyecto, incluyendo aquellos con las partes responsables, subcontratistas y sub-receptores.

- h. *Cada contrato emitido por la parte responsable, subcontratista o sub-beneficiario en relación con el presente Documento de Proyecto* incluirá una cláusula declarando que, en relación con el proceso de selección o en la ejecución del contrato, no se han dado, recibido o prometido ningún honorario, gratificación, descuento, regalo, comisión u otro pago que no sean los mostrados en la propuesta, y que el receptor de fondos cooperará con todas y cada una de las investigaciones y auditorías posteriores al pago.
- i. En caso de que el PNUD se refiera a las autoridades nacionales pertinentes para que se adopten las medidas legales apropiadas en relación con cualquier presunto incumplimiento relacionado con el proyecto, el Gobierno velará por que las autoridades nacionales pertinentes investiguen activamente las mismas y adopten las medidas legales adecuadas contra todas las personas que hayan participado en el proyecto, recuperará y devolverá los fondos recuperados al PNUD.
- j. Cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario se asegurará de que todas sus obligaciones establecidas en esta sección titulada "Gestión de Riesgos" se traspasan a cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario y que todas las cláusulas bajo esta sección tituladas "Cláusulas Estándar de Gestión de Riesgos" se incluyen, mutatis mutandis, en todos los subcontratos o sub-acuerdos celebrados con posterioridad al presente Documento de Proyecto.